

Putumayo

Informe preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz

OCTUBRE 2018



Resumen

En términos generales, los diferentes actores tienen una percepción positiva sobre la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en lo que tiene que ver con los avances del PNIS y el PDET. Su alta expectativa contrasta con la incertidumbre sobre la posición del nuevo gobierno y la preocupación por los recursos y capacidades para el cumplimiento de los compromisos. El deterioro de las condiciones de seguridad y la presencia de actores armados ilegales representan una amenaza para la implementación, con un alto impacto humanitario. La reincorporación de los excombatientes está en riesgo y los liderazgos sociales se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hay preocupación por la reactivación de la fumigación.

1. Estado de la implementación

a) La renovación territorial (PDET)

El 23 de septiembre de 2018 se firmó el acuerdo departamental que recoge las propuestas comunitarias, contenidas en el proyecto de desarrollo (PDET) para el Putumayo. En este proceso participaron 970 veredas de 9 municipios del medio y bajo Putumayo, con un involucramiento activo de las comunidades. Se destaca la participación de las JAC, las organizaciones sociales, indígenas y afro. En contraste, según la información de los líderes sociales, las administraciones locales y la Gobernación han tenido poca participación e involucramiento en el proceso.

El resultado del acuerdo departamental ha causado inconformidad en algunos actores. Las organizaciones de mujeres señalan que el documento no tiene un enfoque diferencial que refleje sus reivindicaciones y derechos. Mientras tanto, los líderes sociales señalan que se omitieron puntos que contenían los acuerdos municipales y la priorización de las obras no se dio de manera concertada.

Contenido

Estado de la implementación de los Acuerdos

Posiciones de los actores claves en el territorio

Principales dinámicas y trayectorias de la confrontación armada

Principales preocupaciones

Los funcionarios encargados del proceso argumentan que estos acuerdos quedaron en el ámbito municipal y deben cumplirse. La alta expectativa que hay en los PDET contrasta con la preocupación generalizada por la falta de los recursos para su implementación.

b) La reincorporación

La percepción es que el proceso de reincorporación es débil y hay un alto riesgo de reincidencia por la presión de las organizaciones armadas y la existencia de economías ilegales como el narcotráfico, en el medio y bajo Putumayo. Hay retrasos en la puesta en marcha de los proyectos productivos por las demoras en la aprobación y desembolso de recursos por parte del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Internamente, las FARC también han tenido problemas por los cambios constantes en los liderazgos que debilitan su cohesión y dificultan el proceso de reincorporación colectiva.

Se estima que el 65% de los excombatientes ha salido del ETCR, lo cual no quiere decir que se encuentren en actividades ilegales. Algunos de ellos trabajan fuera de La Carmelita, aunque siguen vinculados a ese espacio; otros han retornado a sus lugares de origen fuera del departamento. Respecto a los excombatientes que se encuentran en el ETCR, están involucrados en procesos educativos para la nivelación académica y formación para el trabajo. También cuentan con dos cooperativas. Una de ellas está a la espera del desembolso de la CNR para iniciar el proyecto productivo. Además, se adelantan distintas actividades promovidas por los excombatientes para la integración de las comunidades cercanas al ETCR.

c) La sustitución de cultivos ilícitos

Alrededor de 20.850 familias se encuentran vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), de las cuales aproximadamente 6.600 han recibido el primer pago. Los mayores avances se encuentran en las veredas alrededor del ETCR, donde los primeros pagos se realizaron en mayo de 2017. Estas comunidades cuentan con asistencia técnica, proyectos de seguridad alimentaria y están en proceso de identificación de las líneas productivas. En las demás zonas del departamento, los primeros pagos se realizaron entre marzo y mayo de 2018 y aún no cuentan con asistencia técnica.

Las principales preocupaciones en este ámbito tienen que ver con: i) La situación de los recolectores, cuya gran mayoría no ha recibido pagos, ni se encuentran vinculados a actividades de interés comunitario; ii) las tensiones entre las comunidades campesinas que tenían sus cultivos en territorios indígenas o consejos

comunitarios afro, que están solicitando que salgan de los territorios e impidiendo el pago a las familias, iii) los conflictos entre las personas que entraron al programa, quienes no se inscribieron y quieren ingresar, y los propietarios de grandes plantaciones de coca que ven en riesgo su negocio; y iv) las amenazas y asesinatos de líderes que impulsan el proceso de sustitución y presiones hacia las familias para que vuelvan a sembrar, generando desplazamiento forzado.

d) Garantías de Seguridad

La percepción generalizada es que han aumentado las agresiones y homicidios de líderes sociales. Estos hechos son asociados a la vinculación y promoción de la sustitución de cultivos, pero también a la presencia de actores armados que presiona a los presidentes de las JAC. Uno de los temas más preocupantes frente a estas acciones es la ruptura de los procesos organizativos, ya que se ha generalizado el miedo y hay temor de asumir los liderazgos comunitarios. Respecto a los excombatientes, la percepción es de inseguridad, producto de algunos homicidios e intentos de asesinato en contra de los desmovilizados y sus familias.

La consolidación de los grupos armados ha generado un alto impacto humanitario. Diferentes actores advierten sobre continuas presiones hacia las comunidades. También señalan restricciones a la movilidad, imposición de normas de conducta, homicidios selectivos, desplazamientos y reclutamiento forzado. Además, en las dinámicas de frontera persiste la explotación sexual de mujeres y niñas.

1. La situación de las víctimas

Dentro de las organizaciones de víctimas existe una preocupación frente a la implementación del punto 5 sobre víctimas. Señalan que la Ley 1448 o Ley de Víctimas no ha logrado reparar a la gran mayoría de las personas y que en el corto y mediano plazo no vislumbran soluciones a sus problemáticas. Se suma que estas organizaciones no ven reflejadas sus demandas de reparación y verdad en los acuerdos del PDET. Esta preocupación aumenta debido a la proximidad del vencimiento de la Ley de Víctimas. El temor es que la reparación se quede en la ayuda básica y humanitaria dada por el Estado, sin una reparación integral.

2. Posiciones de los actores claves en el territorio

En general, los distintos actores en el territorio tienen una perspectiva positiva sobre la implementación de los acuerdos, ya que ven importantes avances con la construcción del PDET, así como en el PNIS. La institucionalidad ve a los acuerdos como la posibilidad de cumplir sus objetivos de desarrollo dados los pocos recursos que reciben. Las comunidades, por su parte, tienen una alta expectativa sobre la

materialización de un proceso de desarrollo construido desde las bases que cambie las realidades del territorio y se adapte a sus necesidades. Sin embargo, los distintos sectores manifiestan su preocupación por el cumplimiento y la continuidad que el Gobierno actual le puede o no dar a estos procesos y los escasos recursos para cumplir lo acordado. Otra de las preocupaciones es la poca capacidad local con la que cuenta la institucionalidad para implementar los Acuerdos.

3. Principales dinámicas de la confrontación armada

Las estructuras disidentes de los frentes 1, 7 y 48 se encuentran en un proceso de fortalecimiento y consolidación. Además, en el departamento tiene presencia una estructura del crimen organizado conocida como “La Constru”. Hasta el momento se evidencian pactos frágiles de no agresión entre los grupos armados. Sin embargo, con la expansión de la disidencia del Frente 7 hacia el sur del departamento, un territorio bajo el control de la disidencia del Frente 48, estos acuerdos se podrían romper, con el riesgo de que aumente la violencia.

La Fuerza Pública ha venido realizando operaciones conjuntas en contra de estas estructuras. Las acciones han recaído principalmente sobre el Frente 7, con dos bombardeos y la captura de “El Médico” uno de sus principales líderes. Además, se destacan las continuas capturas a miembros de “La Constru”.

4. Preocupaciones sobre la implementación

- a) Entrada de empresas petroleras y explotación minera tras la salida de las FARC, con riesgo de impactos medioambientales y afectación de la tenencia de la tierra por parte de los campesinos.
- b) Deterioro de las condiciones de seguridad, con afectación de los liderazgos y los procesos participativos.
- c) Incertidumbre entre diferentes sectores sociales por la posición del nuevo gobierno sobre los Acuerdos.
- d) Preocupación por el retorno de la fumigación.
- e) Problemas vinculados a la tierra y conflictividades asociadas a su acceso y uso con campesinos que se encuentran en territorios indígenas y afro.
- f) La falta de comprensión del enfoque de género y su desarrollo en la implementación de los Acuerdos.

5. La implementación en cifras

